

Manifiesto: PRIMERO DE MAYO DE 2009

Bajo una sola palabra, **crisis**, pretenden ocultar la realidad. No estamos ante una crisis más. Esta es la crisis de un sistema social y económico que genera explotación, pobreza, injusticias, represión, guerras... Todo el vocabulario que rodea la crisis oculta la causa, que no es otra que el actual sistema capitalista y su tan defendida globalización neoliberal.

Estamos inmersos en la primera crisis del sistema capitalista, tras la denominada globalización económica.

La situación actual debería servir para comprender que el capitalismo nunca fue un sistema capaz de distribuir riqueza y generar bienestar, contra lo que defiende el discurso de la clase dominante y parece que ha empezado a calar en alguna parte de la clase trabajadora. La depredación desatada por las transnacionales ha provocado fracturas sociales de difícil cura y ha comenzado a devorarse a sí misma. Vemos a los gobiernos y a los bancos centrales librar fondos sin fin para salvar a las grandes corporaciones financieras, en lugar de legislar penalmente contra los resultados de su especulación. Mientras, escasean las medidas para evitar que las clases más desfavorecidas, las clases medias y -en una medida nada desdeñable- el sector público paguen los platos rotos de una crisis en cuya gestación nada han tenido que ver.

El modelo de crecimiento en el Estado Español, desde hace al menos diez años, se ha basado en dos pilares fundamentales: la construcción y el consumo privado; un consumo privado no asentado en el incremento salarial, sino en el endeudamiento de las familias. La economía, a todos los niveles, ha ido creciendo, pero todos los gobiernos de este periodo han perdido de vista un dato elemental: se crecía a crédito, con el consiguiente endeudamiento. El endeudamiento tiene como consecuencia directa la reducción del consumo y por tanto, a medio plazo, del crecimiento. Además, los salarios no se han beneficiado de este crecimiento, llegando incluso a perderse objetivamente poder adquisitivo, dado que el gran beneficiario ha sido el excedente empresarial.

La realidad actual de la mayoría de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras no es nueva, simplemente se ha agudizado: dificultades para encontrar trabajo o vivienda, privatización de los servicios públicos como el transporte, el sistema sanitario, la enseñanza, la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres o los centros de atención a personas mayores. Estos servicios públicos son concebidos por los gobiernos como un negocio y no como un derecho, lo que conduce inexorablemente al deterioro y precariedad de la red de servicios sociales.

En los últimos años se han intensificado las políticas de contención de los salarios, al tiempo que el beneficio empresarial ha aumentado día tras día, el poder adquisitivo se ha reducido y el IPC se ha disparado muy por encima de las previsiones oficiales. Para los trabajadores y trabajadoras es irrenunciable la cláusula de revisión salarial en todos los convenios colectivos, incluyendo su regulación para el sector público, así como aumentos salariales que compensen las constantes pérdidas de poder adquisitivo.

En el Estado Español, la contención presupuestaria afecta a los derechos laborales y sociales y a las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Los últimos Presupuestos Generales han sido claramente restrictivos para quienes sufren la crisis y generosos para los sectores que la han provocado. No se entienden las cuentas públicas y la ausencia de medidas concretas, cuando en marzo de 2009 la cifra de parados en todo el estado es de 3.605.402 personas: el 15,5%. Y a eso hay que añadir la disminución más que notable de los contratos de carácter indefinido a jornada completa.

En la Comunidad de Madrid, el paro ascendió a 405.673 desempleados en el mes de marzo: 211.133 hombres y 194.540 mujeres. Aunque aparentemente el paro afecta más a los hombres que a las mujeres, son éstas las que sufren más sus efectos: primero porque parten de una tasa inferior de ocupación y, segundo, porque -en situación de crisis- son las mujeres las que satisfacen mayoritariamente las necesidades familiares.

El dinero, la obtención de beneficios, el enriquecimiento rápido, la mercantilización general de la sociedad, se han convertido en la medida de todas las cosas. Pero no es un fenómeno nuevo: es la base del sistema capitalista ahora en crisis. Por eso, deberían ser ellos, los defensores de este sistema y su economía de mercado, quienes pagaran una crisis que sólo ellos han provocado.

La crisis que la paguen quienes la provocaron

- Es imprescindible defender las inversiones públicas para la creación de empleo público en sectores como la educación, la sanidad, los transportes..., así como rechazar los recortes presupuestarios para este fin.
- Planteamos la necesidad de la creación de una banca pública como la única forma de que los trabajadores y trabajadoras -y la ciudadanía en general- no vean comprometido su salario, sus pensiones, sus ahorros y su vivienda, por una especulación financiera voraz.

Contra la precariedad laboral

- Por la defensa del empleo estable, digno y seguro; contra los ERE y contra las pretensiones de las patronales de flexibilizar aun más la contratación. Denunciamos las ETT y los contratos basura.
- Lucharemos para que no se retroceda más en los derechos laborales y por erradicar la precariedad laboral que afecta a las mujeres, que tienen mayores dificultades en el acceso al empleo, que cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, que son contratadas para los puestos de menor remuneración y cualificación y a jornadas parciales.
- Al mismo tiempo, es imprescindible demandar el cumplimiento de la legislación en materia de riesgos laborales y exigir a las empresas el respeto a las normas de salud laboral. Más salud equivale también a menos precariedad.

En defensa de los Servicios Públicos

- Defendemos la transformación y mejora de sus estructuras, en aras de una eficacia que no sólo conlleve la consolidación del nivel de prestaciones existente, sino que las amplíe cualitativa y cuantitativamente.
- Exigimos la gestión pública de los servicios públicos y el control de la banca y las agencias financieras.
- Debemos intensificar la lucha contra los procesos de privatización: externalización, concertación de servicios, gestión privada de los servicios de titularidad pública, etc.
- Hoy más que nunca es necesario posicionarse contra la precarización y el empeoramiento en las condiciones de trabajo del personal que trabaja en estos servicios y contra la pérdida de los servicios públicos universales como derechos.

Retribuciones que permitan una vida digna

- Reivindicamos el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras y denunciamos la pérdida continuada del valor real de los salarios. Exigimos la cláusula de revisión salarial vinculada a las subidas del IPC, así como las medidas necesarias para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la última década.
- Consideramos imprescindible que el Sueldo Mínimo Interprofesional y la pensión mínima se eleven a mil euros.
- Es necesario aumentar el período de cobro del subsidio de desempleo.
- Rechazamos, en cualquier circunstancia, la discriminación salarial que sufren las mujeres.

Reparto del trabajo

- Defendemos la reducción generalizada de la jornada laboral a 35 horas semanales y la jubilación voluntaria a los 60 años.
- Rechazamos la política de horas extraordinarias en la jornada laboral.
- Defendemos el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, sin discriminación por motivo de sexo, raza, cultura religión u orientación sexual y de género.
- Exigimos la implantación de Planes de Igualdad en todas las administraciones públicas y empresas.